



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte nº: 14921/2019 AML

Autos: “FERRARIO, FELIX HORACIO c/ ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva del Expte. Nº 14921/2019

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS

I.- Surge de autos que mediante la Resolución N ° 021/2018 (DI CRSS), la Administración Federal de Ingresos Públicos resolvió no hacer lugar a la presentación planteada por el contribuyente Ferrario Felix Horacio, confirmando la deuda y multa intimada por el por los períodos 05/2003 a 08/2013, con sustento en el dictamen que antecede.

II.- Contra ello, la actora interpuso recurso de apelación, dentro del plazo prescripto por la legislación aplicable en la materia.

En oportunidad de disponerse la elevación de las actuaciones, la AFIP deja constancia que la apelante acreditó parcialmente el depósito previo de la deuda resultante de la resolución recurrida, según lo preceptúa la normativa de aplicación.

Al respecto, la recurrente solicita ser eximida del requisito exigido por el art. 15 de la Ley 18.820, citando jurisprudencia del fuero en apoyo de su reclamo. Asimismo, agrega que se encuentra imposibilitada de hacer frente al monto reclamado como consecuencia de la situación financiera que atraviesa el sector de salud al que pertenece. Como prueba de sus dichos menciona la normativa dictada por os Poderes Ejecutivo y Legislativo Nacional estableciendo y manteniendo la emergencia sanitaria.

En este estado de cosas corresponde previo a todo, tratar el pedido de eximición del depósito previo requerido por la contribuyente.

Así delimitada la incidencia, corresponde destacar que el art. 15 de la ley 18.820 expresamente dispone que “...deberá depositarse el importe de la deuda resultante de la resolución administrativa; su omisión producirá la deserción del recurso...”.

Sobre este asunto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene declarado en numerosos fallos, que las disposiciones de diferentes leyes que supeditan la concesión del recurso a que previamente se pague su importe, no resultan violatorias del art. 18 de la Constitución Nacional, si no se ha alegado y probado que aquélla reviste desproporcionada magnitud con relación a la concreta capacidad económica del recurrente y ha desestimado como insuficientes las manifestaciones en abstracto acerca de la imposibilidad de pago.



Idéntico criterio es el que prevalece en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos y recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional y de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar los arts. 15, segunda parte, de la ley 18.820 y 12 de la ley 21.864, (ver fallos 215:225 y 501; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 y 240; 296:40 y 57; 307:1753).-

Por otra parte, nuestro más Alto Tribunal ha manifestado en reiteradas oportunidades que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, sin que ello importe una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57, entre otros), existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que tornaría ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (C.S.J.N.: Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/impugnación actas de inspección", Sent. del 25/3/86 y, específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, cons. IV), el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos: 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (fallos 288:287 cons. 10º)".

Ello así, quien pretende eximirse del pago exigido por la norma en cuestión debe aportar acabada y fehaciente prueba acerca que se encuentra alcanzado por alguna de las hipótesis de excepción de creación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Teniendo en cuenta que el instituto de la prescripción es de orden público y que la inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley, libera al deudor de la obligación, se entiende que en el marco de la doctrina fijada por el Alto Tribunal sobre la exigencia del pago previo, en el caso particular de autos, resulta procedente la apertura de la instancia pues lo contrario implicaría consentir que circunstancias formales conduzcan a la frustración del valor justicia.

Por lo expuesto, atendiendo a las constancias de autos, corresponde en el caso concreto, eximir al actor del depósito previo exigido por el art. 15 de la ley 18.820 y declarar abierta la instancia judicial.

III) En primer término la recurrente solicita que se declare la nulidad de la resolución en virtud que considera que carece de causa, entendida como el elemento de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1
sustentación del acto administrativo en hechos, antecedentes y derecho aplicable (cfr. art. 7 de la ley 19.549).

Asimismo, expresa que sin introducir argumentos que refieran al reconocimiento de la relación laboral de la empleada con su tía fallecida, considera que el reclamo se encuentra prescripto y además dice haber abonado los períodos reclamados. Finalmente argumenta sobre la improcedencia de la multa impuesta, insistiendo en que resulta improcedente por la inexistencia de los presupuestos que habilitan su imposición.

IV) Previo a resolver la cuestión de fondo, corresponde señalar que con relación al planteo que las actas recurridas carecen de los requisitos propios del acto administrativo, es dable destacar que conforme Juan Gilibert, en “ El Derecho a la legítima defensa en el sistema jubilatorio argentino” (L.T, pág. 385/6), las diligencias que se cumplen con la intervención de los funcionarios competentes y se instrumentan a través de las actas de verificación, que se notifican al interpelado, no reúnen los requisitos esenciales ni generales de un acto administrativo y ello por cuanto no ha mediado una decisión fundada que cause estado, pues hasta tanto no se haya agotado el procedimiento regulado por la ley 18.820 y que da lugar a la ejecución, no es un acto administrativo definitivo, contando el obligado con los medios legales apropiados para demostrar la improcedencia del débito intimado.

Es sólo la conformidad del contribuyente, mediante la no impugnación de las actas, lo que permite al fisco proceder a su cobro, y si, por el contrario, se muestra disconforme con la deuda o infracción, la ley 18.820 pone a su alcance el procedimiento recursivo adecuado para fundamentar sus agravios. Sólo después de una decisión fundada, acto administrativo definitivo, contraria a la pretensión del recurrente, se habilitará a la ejecución fiscal, siempre y cuando no medie apelación ante la Excm. Cámara Federal de Seguridad Social, pues entonces deberá esperarse una sentencia favorable de ésta a los intereses fiscales.

Como consecuencia lógica de lo expuesto, cabe concluir que las actas de inspección e infracción no son más que una constatación que hace la Administración de la situación del contribuyente, por lo que no cabe exigir de las mismas los requisitos propios de los actos administrativos, como tampoco que sean realizadas por juez administrativo, ya que por tratarse de constataciones las mismas pueden ser cuestionadas- tanto la deuda como la multa- y dar nacimiento posteriormente al proceso que nos ocupa. Por todo lo expuesto, corresponde la desestimación del agravio esgrimido por el apelante en este sentido.

V) Entrando a la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal, cabe señalar que las presentes actuaciones se han originado como consecuencia de la comunicación de la sentencia firme dictada por el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares en autos “Sanagua Elda del Valle c/ Ferrario Felix Horacio -en



carácter de heredero testamentario de la Sra. María Inés Giardulli s/ Despido (Expte. N° 380/14).

Sobre la base de lo señalado precedentemente, la fiscalización actuante determinó deuda y multa por falta de aportes y contribuciones de los Recursos de la Seguridad Social por los períodos que consideró no prescriptos, esto es desde el 05/2003 a 08/2013.

Sentado ello, cabe remarcar que el procedimiento administrativo se inició con las Actas de Inspección e Infracción labradas en virtud de la OI 1465248, correspondiente a los períodos señalados. Así, con fecha 27 de marzo de 201 8400/L N° 201701715910 (ver Actuación Nro 16935-2607-2017).

Debe dejarse sentado que los temas relativos al vínculo laboral, períodos trabajados y remuneración quedan al margen de la cuestión en tanto rige el principio de la cosa juzgada, en virtud del cual debe considerarse que ha quedado firme respecto del reclamante, la materialidad de los hechos comprobados y circunstanciados en la sentencia que se acompaña.

Ello así, en tanto la “Cosa Juzgada” resulta ser “un impedimento jurídico que prohíbe volver a juzgar una cuestión ya resuelta por los tribunales de justicia, entre las partes a quienes la sentencia puede serle opuesta (Fassi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Astrea, T°I -606 cit. Conforme Giuliani Fonrouge, Carlos y Navarrine Susana –Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, Ed. Depalma 2001, página 725).

De esta manera, entrando a la cuestión a decidir –dado que no se cuestiona que resulte de aplicación la prescripción decenal-, corresponde resolver desde qué fecha corresponde declarar prescriptos o no los períodos reclamados en autos.

Así, la prescripción liberatoria es, concreta y sintéticamente, la extinción de las acciones derivadas de un derecho por su abandono por el titular durante el término fijado por la ley. El art. 16 de la ley 14.236 dispone en su primer párrafo que “Las acciones por cobro de contribuciones, aportes, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social prescribirán a los 10 años”, por lo que es dable destacar que con la prescripción lo que se da por extinguido es la acción con que se cuenta para reclamar un derecho. En tal sentido, el art. 3949 del Código Civil dispone que “La prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere”.

Sobre la cuestión a dilucidar corresponde señalar en primer lugar, que la aplicación del artículo 3980 del C.C. al caso de autos no resulta procedente toda vez que AFIP-DGI es un organismo del estado, al que debido a su función, la legislación - art. 35 de la ley 11683- lo ha dotado de recursos y herramientas a los efectos de indagar sobre presuntos responsable, con prescindencia de la causa judicial que promoviera el trabajador.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

El artículo citado precedentemente – art. 3980 C.C.-, si bien dispone una suerte de suspensión de los términos prescriptivos, refiere a situaciones en las que desde el punto de vista fáctico el acreedor se ve imposibilitado de reclamar su derecho. Esta imposibilidad de obrar debe ser apreciada, concretamente, en relación con la persona del demandante.

En este contexto, no se observa, que el fisco haya probado o invocado una situación de dificultad o imposibilidad de hecho que la hubiese impedido temporalmente de ejercer la acción correspondiente.

Sobre el punto resulta clarificador lo expresado por el Dr. Jorge Joaquín Llambías en su Tratado de Derecho Civil - Obligaciones (Tomo III, 3era edición actualizada, Ed. A. Perrot, pág. 357) al manifestar “... El comienzo de la prescripción es independiente del conocimiento que tenga el titular de la existencia de su derecho...”.

A mayor abundamiento, se hace oportuno señalar que el instituto de la prescripción liberatoria presenta como finalidad última tutelar uno de los elementos que se presentan como indispensables para el sostenimiento de cualquier sociedad, la seguridad jurídica y consiguientemente la paz social. Prueba de ello es que el legislador se ha ocupado de establecer distintos plazos prescriptivos, hasta para las acciones penales (art. 59 y 62 del Cod. Penal).

Ahora bien, existen casos que la legislación ha querido preservar de los efectos de la prescripción, y estos, por ser excepciones a la regla, se encuentran taxativamente establecidos, entre los cuales no se halla la cuestión que nos ocupa.

En sentido análogo se ha expresado esta sala en las causas “Clorox Argentina S.A. c/AFIP-DGI s/Impugnación de Deuda”, Expte. 14.956/06, S.D.120.013 del 24/11/06, y en “Oficina Comercial de la Embajada de la Rep. de Corea c/ AFIP-DGI s/Imp. De Deuda”, Expte. 1650/06, S.D. 120.021 del 27/11/2006; así como la Sala III en los autos “Maitor S.R.L. c/Dirección Gral. Impositiva”, S.D. 111.693 del 20/02/06, por el voto de la mayoría).

A mayor abundamiento, y no encuadrándose el caso de autos en ninguno de los supuestos que taxativamente el legislador ha querido preservar de los efectos de la prescripción (vgrs. Art. 4019 C.C.) no corresponde justificar judicialmente la liberación de la AFIP, de las consecuencias de aquella.

Ello así por cuanto el organismo fiscal tiene amplias facultades de verificación, control y formulación de cargos (art. 35 de la ley 11.683 y cctes), respecto del reclamo que ahora persigue, con prescindencia de la causa judicial que promoviera el trabajador.

A mayor abundamiento corresponde resaltar que, si bien el art. 3980 del C.C. dispone una suerte de suspensión de los términos prescriptivos, refiere a situaciones en las que desde el punto de vista fáctico el acreedor se ve imposibilitado de



reclamar su derecho. Esta imposibilidad de obrar debe ser apreciada, concretamente, en relación con la persona del demandante.

Y en el caso de autos, no se encuentra configurada situación alguna que permita afirmar que la AFIP se vio impedida de ejercer aquellas facultades.

En sentido análogo se ha expedido la Sala III de esta Excma Cámara Federal de la Seguridad Social, in re “Maitor SRL c/ Dirección General Impositiva”, sentencia definitiva 111.693 del 20/02/2006 (rev. LL del 19/04/06), por el voto de la mayoría, posición ésta ya discernida con anterioridad por el Dr. Fasciolo, en disidencia, en la causa “Editorial Perfil c/ AFIP-DGI s/ Impugnación de deuda, sentencia 109.259 del 9/08/05.

Por consiguiente, cabe admitir la prescripción liberatoria en los términos del art. 16 de la ley 14.236, respecto de los créditos devengados con anterioridad a los 10 años previos al reclamo de la rubrada, esto es 2/12/2016 (primera fecha de notificación de las Actas de Inspección e Infracción, según surge de la Actuación SIGEA N° 16935-2607-2017, aunque luego se haya notificado con fecha 27.03.2017 en donde el organismo quitó períodos que reclamó en la primera notificación pero que luego consideró prescriptos), dejando sin efecto parcialmente la resolución recurrida, debiendo readecuar la deuda y multa reclamadas, de acuerdo a lo expresado precedentemente.

VI) En cuanto al planteo referido a la multa, esta Sala ha sostenido sobre el particular que en el caso de multas previsionales la sola constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción del infractor. El elemento subjetivo no tiene cabida, dado que la sanción tiene por finalidad la falta objetivamente considerada y no la intencionalidad de la parte; ello sin perjuicio de constatar la razonabilidad de la sanción. Esto no implica que el infractor invoque y demuestre la existencia de alguna causal exculpatória válida (cfr. “Pilot Pen S.A. c/DGI s/ Impug. de deuda”, CFSS. Sala II, sentencia del 19/10/98).

A mayor abundamiento cabe señalar que la RG 3756, reemplazada por la RG 1566 (texto sustituido en 2004) no es una norma penal, sino que como se señaló precedentemente, se trata de una disposición que se limita a fijar el monto de la sanción -entre un máximo y un mínimo- establecida por la Ley N° 17.250, a los efectos de evitar arbitrariedades por parte de los funcionarios en la aplicación de la misma.

La resolución General 1566/04, en su art. 5 especifica el régimen sancionatorio a aplicarse en virtud de lo dispuesto en el art. 15 punto 1 inc. c) de la ley N° 17.250. Dicha norma establece que una vez constatada la infracción por parte del organismo, se aplica una multa cuyo porcentaje sobre el total omitido se gradúa con relación al tiempo transcurrido desde el vencimiento de la obligación y el efectivo ingreso del monto adeudado sin atribuir relevancia a toda circunstancia de hecho de índole subjetiva para eximir o atenuar la multa correspondiente.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

El art. 15 inc. b) de la ley 17.250 además de prever el caso de falta de denuncia de trabajadores también determina multa para el caso que exista incumplimiento de la retención de aportes que deban efectuarse respecto de los trabajadores, motivo por el cual tampoco le asiste razón al apelante toda vez que se encuentra verificada la configuración de una infracción formal lo que justifica la imposición de la multa correspondiente a la infracción detectada en razón de la inobservancia por parte de la contribuyente de las prescripciones del artículo citado.

Por todo lo expuesto, no logrando conmover el recurso interpuesto las fundamentaciones de las resoluciones recurridas, corresponde confirmarlas teniendo en cuenta que deberá readecuarse la liquidación de acuerdo a lo expuesto en el acápite V).

VII) Respecto a lo expresado por la parte actora, en cuanto a que ha abonado la totalidad de las sumas reclamadas, atento a lo informado por el organismo fiscal -ver fs. 47/65- en donde informa que no se han registrado cancelaciones posteriores a las fechas allí indicadas, reiterando lo informado a fs. 106/107 como consecuencia de la medida para mejor proveer dictada por esta Sala, corresponde su desestimación.

VIII) Dado el resultado alcanzado, dada la particularidad de la temática abordada, pudo válidamente generar en la parte actora la creencia de que contaba con un mejor derecho a litigar o, al menos, de lograr esa respuesta en el ámbito judicial. Por esa razón, las costas de ambas instancias deben distribuirse en el orden causado (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar formalmente admisible el recurso; 2) Revocar parcialmente la resolución recurrida de acuerdo los fundamentos expuestos en la presente; 3) Costas por su orden.

Regístrese, notifíquese y remítase.

